

**SENTENCIA DEFINITIVA
Juzgado Primero de lo Mercantil**

Aguascalientes, Aguascalientes, a diecinueve de febrero del año dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos del expediente número **3804/2017** relativo al juicio que en la vía **EJECUTIVA MERCANTIL** promueve **MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA** en contra de **JUAN MANUEL PEÑA URBINA** sentencia definitiva que hoy se dicta bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS :

I.- Establece el artículo 1324 del Código de Comercio que, "Toda sentencia debe ser fundada en ley y si ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir la controversia se atenderá a los principios generales de derecho tomando en consideración todas las circunstancias del caso".- A su vez el artículo 1327 del citado ordenamiento jurídico establece que, "la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación".

II.- Conforme a los criterios doctrinales la competencia es la porción de jurisdicción que la Ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios; de ella derivan los derechos y obligaciones de las partes de que se ha hecho mérito.- Bajo este concepto se puede entender que la competencia presupone la jurisdicción y siendo así, conforme a lo que es dispuesto en el artículo 1090 del Código de Comercio toda demanda debe interponerse ante Juez competente.- Bajo este orden de ideas la parte actora en el juicio funda sus pretensiones en el documento mercantil tipo pagare que suscribiera el demandado **JUAN MANUEL PEÑA URBINA** como obligado principal así como **GUADALUPE MONTSERRAT CAMPOS PEÑA** como aval en fecha **ocho de junio del año dos mil quince**, con fecha de vencimiento el **nueve de junio del año dos mil quince** documento que en original se exhibiera junto con el escrito inicial de demanda y que se tiene a la vista al momento de dictarse la presente resolución, señalándose como domicilio del demandado el ubicado en **HACIENDA CHICHIMECO NÚMERO DOSCIENTOS CINCO DEL FRACCIONAMIENTO VILLERÍAS , DE ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES**, domicilio éste en el que se le requirió de



pagar y se le emplazara en forma y términos de ley, lo anterior según actuación que de lo anterior obra glosada a fojas **dieciocho frente y vuelta** de los autos, lo que conlleva a determinar que este Tribunal si tiene Competencia para conocer del presente juicio, en razón a que el artículo 1104 fracción I del ordenamiento jurídico que se cita deduce que, será Competente para conocer del negocio el Juez del lugar que el deudor haya designado para ser requerido de pago.

III.- En el caso que nos ocupa la parte actora MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA demanda a JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal en el ejercicio de la acción cambiaria directa, por el pago de la cantidad de **VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** por concepto de suerte principal, el pago de los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción y el pago de gastos y costas que se devenguen con motivo de la tramitación del presente asunto, fundando sus pretensiones como ya se ha dicho en el documento que lo es base de su acción, título correspondiente a **un pagaré**, que en original se exhibiera junto con el escrito inicial de demanda y que resulta necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna, conforme lo prevé el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

IV.- Por su parte el demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal no dio contestación a la demanda y por consecuencia no opuso excepciones ni defensas. Y por lo que hace a GUADALUPE MONTSERRAT CAMPOS PEÑA como aval, la parte actora se desistió de la instancia según auto de fecha **nueve de enero del año dos mil diecinueve**.

V.- En lo relativo a la procedencia de la vía ejecutiva mercantil que se intenta, en razón de que el documento fundatorio de la acción es de los previstos por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, disposición legal ésta en la que se señala que, el pagaré debe reunir los requisitos que en el mismo se señalan, y al efecto el suscrito Juez de los autos estima que la misma ha quedado debidamente acreditada con los títulos a que se hace mención y que resulta necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna, acorde a lo que para ello es dispuesto por el artículo 5º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, documento que conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1391



del Código de Comercio lo son de aquellos que traen aparejada ejecución, la que se deduce para hacer posible la efectividad en su cobro.

VI.- La acción cambiaria directa y que lo es promovida por la parte actora ha quedado probada en autos en atención a las siguientes consideraciones: los documentos fundatorio de la acción, por ser títulos ejecutivos que sirven como base y fundamento para ejercitar el derecho que en él se consigna conforme lo establece el artículo 5º. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tipo de documentos tienen el valor de prueba preconstituida, según y cómo se deduce de la que a continuación se transcribe:

TITULOS EJECUTIVOS, SON PRUEBA PRECONSTITUIDA.- Los documentos que la Ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción.- Quinta época. tomo XXXII, Pág. 1150 Amparo Civil directo 2002/30/3ra. Secc. Cuevas Rodolfo. diez de julio de mil novecientos treinta y uno. unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona ponente. Tomo XXXIX. Pág.. 922. Recurso de súplica 191/32. Rodríguez Manuel. siete de octubre de mil novecientos treinta y tres. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona ponente.- Tomo XL, Pág.. 2484.- Recurso de súplica 265/33/sec. de acdos. Rovalo Fernández Luis doce de marzo de mil novecientos treinta y cuatro. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona ponente.- Tomo XLI, Pág.. 1321. Recurso de súplica 169/33/sec. de Acdos. Ingenio "Santa Fe", S.A. cuatro de julio de mil novecientos treinta y cuatro unanimidad de votos cinco, la publicación no menciona ponente. Nota: Los datos que señalan para los apéndices a los tomos L y LXIV (quinta época) corresponden a las partes tercera y cuarta, respectivamente, Sección Civil.-

Quedo demostrado en autos que el ahora demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal en fecha **ocho de junio del año dos mil quince** suscribió el documento mercantil tipo pagaré que se anota por así desprenderse del título que lo es fundatorio en la acción, documentos que lo fueran elaborado en favor de la hoy parte actora **MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA y/o NORMA ANGELICA MARTÍNEZ ÁLVAREZ** título de crédito que ampara la suma de **VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** acorde lo anterior a lo que literalmente fuera consignado a la letra en el título de crédito, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo que así puede desprenderse del que en original se exhibieran junto con el escrito inicial de demanda, acorde a su vez a la naturaleza jurídica de los documentos como una prueba preconstituida de la acción y donde por ende, el término dilatorio que ahora se concede en el juicio lo es para que la parte demandada pruebe sus excepciones y defensas y no para que la parte



actora demuestre su acción, teniendo pues aquéllos pleno valor demostrativo que debe ser destruido, en su eficacia, por las excepciones que se hagan valer conforme lo establece para ello el artículo 1194 del Código de Comercio.

En razón de lo anterior y considerando, conforme se desprende de lo actuado en autos y de la propia prueba presuncional, de conformidad con lo contenido en el artículo 1305 del Código de Comercio, que no existe duda sobre la existencia del título de crédito y que con base a la característica de literalidad del mismo, se acredita la existencia de la obligación cartular a cargo de la demandada, así como la suscripción por su parte del pagaré base de la acción, permite resulte procedente la acción que se ejercita en términos de lo contenido en los artículos 150 y 151 de la propia Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

VII.- Por su parte el demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal de éste habiendo ya anotado no produjo contestación a la demanda entablada en su contra y por consecuencia no opuso excepciones ni defensas, no obstante que como ha sido asentado ya, dada la naturaleza jurídica de los títulos de crédito al ser considerado como una prueba que se preconstituye en el juicio y donde por tanto es a la parte demandada a quien corresponde aportar los elementos de prueba necesarios que les permitan desvirtuar el contenido y alcance de lo consignado en los documentos, vigilando además del correcto y oportuno desahogo de sus probanzas, acorde a lo que para ello se establece en el artículo 1194 del Ordenamiento Mercantil, resultando aplicable a lo anteriormente asentado la siguiente tesis jurisprudencial:

PRUEBA, CARGA DE LA. EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES.- "de lo preceptuado en el artículo 1194 del Código de Comercio, se desprende que en los juicios Ejecutivos Mercantiles es a la parte demandada a quien corresponde la carga de la prueba de sus excepciones y defensas.- Por lo tanto, es a ella a quien incumbe aportar al juicio todos los medios de prueba con el objeto antes indicado y, además, vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que haya ofrecido y le sean admitidas".

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Amparo Directo 15/90, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época tomo XIV julio de 1994, primera parte, pág. 732.

En base al contexto señalado se declara que procedió la vía ejecutiva mercantil y en ella la parte actora probó su acción intentada y que el demandado no dio contestación a la demanda y no opuso excepciones ni defensas.



Por tanto se condena a JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal a pagar a favor de la parte actora MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA la cantidad de **VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** por concepto de suerte principal.

Se condena al demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal a pagar a favor de MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA un interés moratorio a razón del **tres punto cero ocho por ciento mensual** sobre la suerte principal que ampara el documento basal, exigible a partir del día **diez de junio del año dos mil quince**, día siguiente al del vencimiento del pagaré y hasta que se haga pago de lo adeudado, prestación que habrá de regularse conforme a derecho en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

Lo anterior no obstante en el hecho de que en el título de crédito conste la estipulación expresa de que el demandado se obligo al pago de intereses moratorios a razón del **diez** por ciento mensual, pero atendiendo al principio de congruencia que debe de mediar en todas las sentencias, ello conforme al artículo 1077 del Código de Comercio en el sentido de que lo resuelto en juicio no debe de ir más allá de lo pedido, esta prestación se regula en un **tres punto cero ocho por ciento mensual** que fue lo que el actor solicito en juicio por este concepto.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena al demandado al pago de las costas y gastos del presente juicio a favor de la parte actora regulados que sean conforme a derecho en ejecución de sentencia.-

Hágase trance y remate de los bienes embargados en este negocio y con su producto páguese al acreedor todas y cada una de las prestaciones que reclama si el deudor no lo hiciere en el término de ley.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 1321, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, del Código de Comercio es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Este Tribunal es Competente para conocer del presente negocio.

SEGUNDO.- Procedió la Vía Ejecutiva Mercantil y en ella la parte actora MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA acreditó la existencia de los elementos de su acción cambiaria directa y la procedencia de sus prestaciones y que el demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal no dio



contestación a la demanda presentada en su contra y por consecuencia no opuso excepciones ni defensas en el juicio.

TERCERO.- Se condena al demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal al pago a favor del actor MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA de la cantidad de **VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL** como suerte principal.

CUARTO.- Se condena al demandado JUAN MANUEL PEÑA URBINA como obligado principal a pagar a favor de MIGUEL JIMÉNEZ MEDINA un interés moratorio a razón del **tres punto cero ocho por ciento mensual** sobre la suerte principal que ampara el documento basal, exigible a partir del día **diez de junio del año dos mil quince**, día siguiente al del vencimiento del pagaré y hasta que se haga pago de lo adeudado, prestación que habrá de regularse conforme a derecho en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

QUINTO.- Se condena al demandado al pago de las costas y gastos del presente juicio a favor de la parte actora regulados que sean conforme a derecho en ejecución de sentencia.

SEXTO.- Hágase trance y remate de los bienes embargados en el presente negocio y con su producto páguese al acreedor todas y cada una de las prestaciones que demanda si el deudor no lo hiziere en el termino de Ley.

SEPTIMO.- Con fundamento en lo que es dispuesto en el artículo 10 en relación al artículo 3º, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, y en el diverso artículo 1079, fracción VI, del Código de Comercio en vigor, requiérase a las partes del proceso para que, dentro del término legal de tres días manifiesten o su oposición a la publicación de la sentencia, una vez que la misma haya causado ejecutoria, respecto de sus datos personales que se contengan en la ejecutoria, en razón de la protección de derechos familiares, de terceros, del honor y las buenas costumbres, en la inteligencia de que tal oposición deberá ser solicitada y justificada mediante el incidente respectivo, conforme a las reglas que para su sustanciación se contengan en las normas que regulan el proceso, determinado que sea de ello por interlocutoria correspondiente.- NOTIFIQUESE.

A S I, Juzgando lo Sentenció y firma el **Juez Primero de lo Mercantil del Estado, LICENCIADO ALEJANDRO CALDERON DE ANDA**, por ante



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

su secretaria de Acuerdos LICENCIADA ROSA MARÍA LÓPEZ DE LARA,
con quien actúa y autoriza.- Doy Fe.

Esta resolución se publicó en la lista de acuerdos, que se fijó en
estrados en términos del artículo 1068 del Código de Comercio con fecha
veinte de febrero del año dos mil diecinueve.- Conste.-

L´JRP/Erika*

SIN
FIN
HIZO
OFICIA